



Consejo de  
Transparencia y  
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

## RESOLUCIÓN

N/REF: RT/0106/2017

FECHA: 20 de septiembre de 2017

**ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno**

En respuesta a la Reclamación número de referencia RT/0106/2017 presentada por [REDACTED], el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

### - ANTECEDENTES

1. Los hechos que han dado lugar a la presente Reclamación p, tomando en consideración la documentación que obra en el expediente, pueden sistematizarse como sigue.
  - El 2 de noviembre de 2016, la ahora reclamante remitió un escrito al Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada -Madrid- en el que solicitó las *actas de las reuniones celebradas con la Comisión Paritaria o con la Mesa General de Negociación del personal laboral y funcionario del Ayuntamiento que se hayan celebrado desde junio de 2011 hasta octubre de 2012*.
  - El siguiente 10 de noviembre de 2016 recibe contestación del Ayuntamiento en la que se le indica que se había requerido al secretario de la Mesa de negociación para que le remitiese las actas.
  - Tras recibir la contestación anterior, y no haber recibido copia de las actas, la ahora reclamante mediante escrito de 2 de marzo de 2017 solicita de nuevo las actas al ayuntamiento de referencia.
  - Mediante escrito registrado en esta Institución el 29 de marzo de 2017 la interesada interpone una reclamación en la que solicita de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno lo siguiente:

[ctbg@consejodetransparencia.es](mailto:ctbg@consejodetransparencia.es)



- a. *Que realice las actuaciones pertinentes para que el alcalde de Torrejón de la Calzada nos remita las actas de la mesa de negociación que van desde junio de 2011 a octubre de 2012.*
  - b. *Que nos indique quién es la persona que está custodiando las actas que van desde junio de 2011 a octubre de 2012.*
  - c. *Que nos indique quién es la persona que ha estado levantando acta de dichas reuniones desde junio de 2011 a junio de 2015.*
  - d. *Que nos indique porqué no están siendo tomadas por el Secretario general las atas donde se encuentran acuerdos que no van a ser ratificados por el pleno o la junta de gobierno local.*
2. El 29 de marzo de 2017, por la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales de este Consejo se trasladó el expediente, a la Secretaria General del indicado Ayuntamiento a fin de que, en el plazo de quince días hábiles, formularan las alegaciones que estimasen por conveniente, aportando, asimismo, toda la documentación en la que fundamentar las alegaciones que pudieran realizar.

A través de un escrito registrado el 24 de abril en esta Institución, se trasladan las alegaciones elaboradas por la Secretaria General que, en síntesis, pueden sistematizarse como sigue.

- *Tras relacionar las convocatorias y actas de las sesiones de la Comisión Paritaria y de la Mesa de Negociación desde junio de 2011 hasta la fecha indica que se observa que están utilizándose ambos órganos como si fueran el mismo con dos denominaciones sinónimas cuando, realmente, la Comisión Paritaria y la Mesa de Negociación son órganos diferentes con funciones distintas. La Comisión Paritaria efectúa un seguimiento e interpretación de cuestiones ya aprobadas mientras que la mesa negocia cuestiones nuevas que, posteriormente, alcanzarán el rango de pactos o acuerdos y pasarán a ser objeto de seguimiento, en su caso, por la Comisión Paritaria.*
- *Existen discordancias entre las convocatorias registradas y las actas entregadas de modo que faltan dos convocatorias de actas que sí se han entregado (las correspondientes a las sesiones de 5 de octubre de 2012 y 28 de febrero de 2013) y hay nueve convocatorias respecto a las que no se han entregado acta (se trataría de las actas correspondientes a las sesiones celebradas con ocasión de su convocatoria por escritos con registro de salida siguientes: 2658 31-8-11; 2881 28-9-11; 3541 23-11-11; 1266 18-4-13; 602 10-3-15; 2061 9-9-15; 2131 16-9-15; 774 29-3-17).*
- *En el caso de las actas de las sesiones celebradas el 28 de septiembre y el 23 de noviembre de 2011 al haber actuado esta fedataria pública como secretaria del órgano, pueden aportarse copia por la misma. Respecto a las restantes actas no entregadas, esta Secretaria general únicamente puede requerirlas a la persona que ha estado levantando acta en tal periodo, habiéndose procedido de tal modo.*



- Finalmente, pone de manifiesto que la Secretaría General sólo ha actuado como secretaria de los órganos de referencia en las dos sesiones indicadas, reproduciendo parte de un informe elaborado a propósito de la reserva al habilitado nacional de la secretaria de estos órganos en cuanto a los acuerdos que vinculen a la Corporación local.

## - FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto *“salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley”*. Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

*“1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).*

*2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias”.*

En desarrollo de las anteriores previsiones normativas el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad de Madrid (Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno) suscribieron el pasado 2 de noviembre de 2016 un *Convenio para el traslado del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el citado artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno* -BOE, n. 13, de 16 de enero de 2017- en los supuestos de resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y por las Entidades



Locales incluidas en su ámbito territorial, así como por los entes, organismos y entidades integrados en el sector público autonómico o local.

3. Precisadas las reglas generales sobre competencia orgánica para dictar esta resolución, con carácter preliminar hemos de formular una consideración de índole formal, relativa al cumplimiento de los plazos establecidos en la LTAIBG con relación a la presentación de una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

En este sentido, cabe recordar que el artículo 24.2 de la LTAIBG dispone que

*La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.*

En el presente caso, de los antecedentes obrantes en el expediente se desprende que, sin perjuicio de la existencia de anteriores solicitudes que fueron contestadas por la administración municipal, la ahora reclamante presentó su solicitud de acceso a la información el 2 de marzo de 2017, mientras que la Reclamación al amparo del artículo 24 de la LTAIBG la ha interpuesto mediante escrito registrado en esta Institución el 29 de marzo de 2017, esto es, en definitiva, incumpliendo el plazo de un mes previsto en el reiterado artículo 24.2 de la LTAIBG.

El artículo 29 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece la obligación de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas y de los interesados de cumplir los términos y plazos establecidos por las leyes para la tramitación de los asuntos.

Asimismo, el artículo 30 de la indicada Ley 39/2015, de 1 de octubre, prevé que los plazos en meses se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Añadiendo que si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

Asimismo, cabe advertir, que el cómputo del plazo señalado en meses o años ha sido interpretado por la jurisprudencia en el sentido de que concluye el día correlativo al de la notificación, publicación, estimación o desestimación en el mes que corresponda.

En conclusión, en atención a todo lo expuesto, procede declarar la inadmisión a trámite de la reclamación por incumplimiento de los plazos establecidos en la norma para su presentación



### III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede **INADMITIR A TRÁMITE**, por extemporánea, la Reclamación presentada por [REDACTED].

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA PRESIDENTA DEL  
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO  
Fdo. Esther Arizmendi Gutiérrez

